

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL



JUZGADO VEINTINUEVE ADMINISTRATIVO
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.
SECCIÓN SEGUNDA

Bogotá, D. C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintidós (2022)

| | |
|-------------|---|
| PROCESO N°. | 11001-33-35-029-2022-00162-00 |
| PROCESO: | EJECUTIVO |
| ACCIONANTE: | HUMBERTO ARTURO AGUDELO |
| ACCIONADO: | DISTRITO CAPITAL – UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C. |

Visto el informe secretarial que antecede y teniendo en cuenta que subsiste la discrepancia en la ejecución de las sentencias condenatorias que se tienen como títulos ejecutivos, el Despacho procede a estudiar la demanda ejecutiva presentada por el señor **HUMBERTO ARTURO AGUDELO** en contra de la **DISTRITO CAPITAL – UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C.**, para lo cual se advierte en primer lugar que las sentencias que se pretende ejecutar fueron emitidas en primera instancia el 24 de febrero de 2017 y en segunda el 31 de octubre de 2018, es decir en vigencia de la Ley 1437 de 2011, por lo que acuerdo con lo dispuesto en el artículo 308 ibídem, dicha ley será la normatividad aplicable.

En segundo lugar, se observa que si bien el CPACA en sus artículos 297 a 299 regula algunos aspectos del proceso ejecutivo, no se ocupa de establecer el procedimiento específico, por lo que es pertinente dar aplicación a la remisión expresa establecida en el artículo 306 de dicho código, por lo que se seguirá lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Por consiguiente, teniendo en cuenta que por medio de la Ley 1564 de 2012, se profirió el Código General del Proceso, derogando el

Código de Procedimiento Civil en los términos del literal c) de su artículo 626, se concluye que para el proceso ejecutivo se debe dar aplicación a la Ley 1564 de 2012.

Sobre la competencia de las acciones ejecutivas.

Los artículos 155 numeral 7 y 156 numeral 9 del CPACA, disponen:

Artículo 155. Competencia de los jueces administrativos en primera instancia. Los jueces administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:

(...)

7. De los procesos ejecutivos, cuando la cuantía no exceda de mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

(...)

Artículo 156. Competencia por razón del territorio. Para la determinación de la competencia por razón del territorio se observarán las siguientes reglas:

(...)

9. En las ejecuciones de las condenas impuestas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo o de las obligaciones contenidas en una conciliación aprobada por esta jurisdicción, será competente el juez que profirió la providencia respectiva.

(...) (Subrayado y negrilla fuera de texto)

Acorde con lo anterior, para el caso en estudio es evidente que la cuantía estimada por la ejecutante en la demanda ejecutiva no supera los 1.500 salarios mínimos legales mensuales, por lo que serían competentes los juzgados administrativos. No obstante, teniendo en cuenta que el juez que profirió la providencia dentro del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho No. 2014- 85 (radicación del proceso de origen) que se pretende ejecutar fue la entonces titular de este Despacho, en observancia del precitado numeral 9º del artículo 156, en criterio de esta instancia judicial la competencia para conocer del proceso ejecutivo está en cabeza de quien profirió la sentencia en el proceso ordinario.

Sobre la ejecutabilidad y la caducidad

- El artículo 297 del CPACA señala que constituyen título ejecutivo las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la jurisdicción de lo

contencioso administrativo mediante las cuales se condena a una entidad pública al pago de sumas dinerarias, como efectivamente se constituye la sentencia presentada como título en el presente caso, pues en ella se condenó a la Distrito Capital – Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial De Bomberos De Bogotá D.C., a liquidar las horas extras diurnas y nocturnas mensuales laboradas en exceso de la jornada máxima legal para empleados públicos territoriales fijada en el Decreto 1042 de 1978, aplicando el límite de 50 horas mensuales, de ser menor dicho límite solo procederá el pago de las horas extras efectivamente laboradas. En la liquidación deberá deducir los días de descanso remunerado, vacancias, licencias, permisos y demás situaciones administrativas que se le hayan presentado al trabajador. Para el efecto, la entidad demandada deberá verificar si el cargo desempeñado por el actor se encuentra dentro de los niveles permitidos por la norma para el reconocimiento del trabajo suplementario y los demás requisitos que se señalaron en la parte considerativa de la providencia; reliquidar lo recargos ordinarios nocturnos y los festivos diurnos y nocturnos pagados al demandante, teniendo en cuenta la jornada máxima legal para empleados públicos territoriales fijada en ciento noventa (190) horas mensuales por el artículo 33 del Decreto Ley 1042 de 1978 y pagar las diferencias que resulte de la reliquidación del recargo ordinario nocturno, se deberán deducir los días de descanso remunerado, vacancias, licencias, permisos, y demás situaciones administrativas que se le hayan presentado al trabajador y Reliquidar al trabajador los recargos ordinarios nocturnos y los festivos diurnos y nocturnos pagados al demandante, teniendo en cuenta la jornada máxima legal para empleados públicos territoriales fijada en 190 horas mensuales y pagar las diferencias que resulten de la reliquidación, reliquidar las cesantías del demandante

- El artículo 299 del CPACA establece en su inciso segundo que la sentencia mediante la cual se le impone a una entidad pública la obligación de pagar una suma de dinero podrá ser ejecutada 10 meses después de su ejecutoria, lo que en el presente caso sucedió el 14 de noviembre del 2018, es decir, los 10 meses se cumplieron el 14 de septiembre del 2019, por lo que se ha cumplido el término para ser ejecutable.

- El artículo 164 literal k), al referirse a la oportunidad para presentar la demanda impuso el término de cinco años para solicitar la ejecución de la sentencia, contados a partir de la exigibilidad de la obligación en ella contenida y como ya se estableció en el presente caso, la exigibilidad de la sentencia inició a partir del 15 de septiembre de 2019, por lo que la caducidad se configuraría hasta el 15 de septiembre de 2024, por lo tanto, la actora se encuentra dentro del término para solicitar su ejecución.

Sobre el procedimiento para solicitar la ejecución de una sentencia.

De conformidad con lo establecido en el artículo 298 del CPACA., cuando la entidad pública que ha sido condenada al pago de una suma dineraria a través de un fallo proferido por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no ha dado cumplimiento al mismo, vencido el término de un año contado a partir de la fecha de su ejecutoria, será obligación del juez que profirió la decisión, sin excepción alguna, ordenar su cumplimiento.

Así mismo, el artículo 306 del CGP dispuso:

Artículo 306. Ejecución.

Cuando la sentencia condene al pago de una suma de dinero, a la entrega de cosas muebles que no hayan sido secuestradas en el mismo proceso, o al cumplimiento de una obligación de hacer, el acreedor, sin necesidad de formular demanda, deberá solicitar la ejecución con base en la sentencia, ante el juez del conocimiento, para que se adelante el proceso ejecutivo a continuación y dentro del mismo expediente en que fue dictada. Formulada la solicitud el juez librará mandamiento ejecutivo de acuerdo con lo señalado en la parte resolutive de la sentencia y, de ser el caso, por las costas aprobadas, sin que sea necesario, para iniciar la ejecución, esperar a que se surta el trámite anterior. Negrilla y subrayas fuera de texto

De conformidad con lo anterior, no es necesario que el acreedor de la sentencia que condena al pago de una suma dineraria a una entidad pública presente demanda, pues con la simple solicitud de cumplimiento se adelantará el proceso ejecutivo dentro del mismo expediente en el que fue dictada y el juez librará el mandamiento de pago de acuerdo a lo dispuesto en la sentencia.

Al respecto estima el Despacho que se cumplen los requisitos formales para librar el mandamiento de pago solicitado.

De los intereses moratorios

En cuanto a los intereses causados en virtud del no pago o pago tardío de las obligaciones impuestas a través de una sentencia, el artículo 192 del CPACA., dispuso que los mismos se causan a partir de la ejecutoria de aquella, así mismo, el numeral 4º del artículo 195 ibídem, estableció que se devengarán intereses de mora a una tasa equivalente al DTF y también a la tasa de interés comercial, en los siguientes términos:

“Artículo 195. Trámite para el pago de condenas o conciliaciones. El trámite de pago de condenas y conciliaciones se sujetará a las siguientes reglas:

1. Ejecutoriada la providencia que imponga una condena o apruebe una conciliación cuya contingencia haya sido provisionada en el Fondo de Contingencias, la entidad obligada, en un plazo máximo de diez (10) días, requerirá al Fondo el giro de los recursos para el respectivo pago.

2. El Fondo adelantará los trámites correspondientes para girar los recursos a la entidad obligada en el menor tiempo posible, respetando el orden de radicación de los requerimientos a que se refiere el numeral anterior.

3. La entidad obligada deberá realizar el pago efectivo de la condena al beneficiario, dentro de los cinco (5) días siguientes a la recepción de los recursos.

4. Las sumas de dinero reconocidas en providencias que impongan o liquiden una condena o que aprueben una conciliación, devengarán intereses moratorios a una tasa equivalente al DTF desde su ejecutoria. No obstante, una vez vencido el término de los diez (10) meses de que trata el inciso segundo del artículo 192¹ de este Código o el de los cinco (5) días establecidos en el numeral anterior, lo que ocurra primero, sin que la entidad obligada hubiese realizado el pago efectivo del crédito judicialmente reconocido, las cantidades líquidas adeudadas causarán un interés moratorio a la tasa comercial.” *Negrilla y subrayas fuera de texto*

¹ “Las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en el pago o devolución de una suma de dinero serán cumplidas en un plazo máximo de diez (10) meses, contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia. Para tal efecto, el beneficiario deberá presentar la solicitud de pago correspondiente a la entidad obligada.”

Así las cosas, los intereses moratorios se causarán desde la ejecutoria de la sentencia a la tasa del DTF por los primeros 10 meses, o después de los 5 días siguientes a la recepción de recursos ante el Fondo de Contingencias siempre y cuando este haya entrado en vigencia, y con posterioridad a este término serán a la tasa comercial.

Con respecto al cese de la causación de intereses, se tiene que, de conformidad con el inciso 5º del artículo 192 del CPACA., para que esta no opere, el ejecutante deberá petitionar ante la entidad condenada dentro de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia.

Al respecto, se evidencia que en el expediente obra la petición por la cual la ejecutante solicitó ante la entidad el cumplimiento de la sentencia, radicada el 15 de agosto de 2019, por lo que esta será tenida en cuenta al momento de la liquidación de crédito.

Bajo las anteriores consideraciones, el Despacho encuentra mérito para librar el mandamiento de pago pretendido por la parte actora y en consecuencia

RESUELVE

PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor del señor **HUMBERTO ARTURO AGUDELO** identificado con la cédula de ciudadanía 79.908.659 de Bogotá, en contra de la **DISTRITO CAPITAL – UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C.**, por valor de cien millones setecientos noventa mil seiscientos cinco pesos (\$100.790.605), por concepto de capital indexado hasta la ejecutoria de la sentencia del 14 de noviembre de 2018.

SEGUNDO: Esta obligación deberá ser cancelada por la entidad demandada en el término de cinco (5) días, tal y como lo ordena el artículo 431 de CGP.

TERCERO: Notificar personalmente al representante legal del **DISTRITO CAPITAL – UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C.**, en los términos del artículo 199 del CPACA modificado por el 612 del C.G.P.

CUARTO: Notificar personalmente al representante del Ministerio Público ante este Despacho, conforme a lo previsto en los incisos 1 y 6 del artículo 612 del CGP.

QUINTO: Se le advierte a la entidad ejecutada que cuenta con el término de diez (10) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago para proponer excepciones, de acuerdo con las disposiciones del artículo 442 del CGP, el cual comenzará a correr una vez surtida la notificación y con posterioridad a los veinticinco (25) días en los cuales quedará el expediente en secretaría a disposición del ejecutado, conforme lo señalado en el inciso 5 del artículo 612 del CGP.

SEXTO: Sobre costas se resolverá en su oportunidad.

SÉPTIMO: RECONOCER personería al doctor **JAIRO SARMIENTO PATARROYO**, identificado con la cédula de ciudadanía 19.191.989 de Bogotá, portador de la T.P. 62.110 del C.S.J., para actuar como apoderado de la parte accionante, en los términos y para los efectos del memorial obrante a folios 1 y 2.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



ENRIQUE ARCOS ALVEAR
Juez

JFBM

**JUZGADO VEINTINUEVE ADMINISTRATIVO
ORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ
SECCIÓN SEGUNDA**

Por anotación en ESTADO notifico a las partes la providencia anterior

Hoy veintiséis (26) de agosto de 2022 a las 8:00 a.m.

SECRETARIA

| | |
|--------------------|--|
| Ejecutante | jairosarpa@hotmail.com |
| Ejecutado | notificacionesjudiciales@bomberosbogota.gov.co |
| Ministerio Público | procjudadm191@procuraduria.gov.co |